

Extremadura

En juego la educación pública y servicios públicos

EL PASADO 19 de enero CCOO-Extremadura celebró en Mérida su primera Conferencia Regional sobre los Servicios Públicos, que contó con la asistencia de cerca de 120 delegados y delegadas sindicales de la región y del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Bajo el lema “Lo Público: Garantía de Igualdad frente a la crisis”, esta Conferencia ha sentado las bases de la acción y de la política de CCOO en los próximos años con respecto a la defensa de los servicios públicos en Extremadura.

En esta línea, la Federación de Enseñanza ha reclamado que se publique urgentemente la convocatoria de ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias. Estas medidas compensatorias se concretan en sufragar los gastos de residencia y de transporte de los alumnos y alumnas que tienen que desplazarse de sus lugares de residencia en zonas rurales, donde no tienen posibilidad de acceder a los estudios de ciclos medios y superiores de educación. CCOO apuesta por continuar con esta línea de ayudas que contribuyen en gran medida a evitar el abandono escolar y critica que no se sepa aún cuál va a ser su futuro, mientras que los años anteriores ya se había publicado su contenido en el inicio del curso.

Por lo que respecta al profesorado, el sindicato está preocupado por la convocatoria este año de oposiciones docentes en Secundaria. La Consejería de Educación aduce que no podrán ofertar más de 50 plazas para las oposiciones de Secundaria, escudándose en una previsión de tasa de reposición del 10% que aún no ha sido aprobada y a la que la Junta debería oponerse con todas sus fuerzas, si es que quiere tener un mínimo de credibilidad en la aplicación de la Ley de Educación. También la Universidad de Extremadura y su presupuesto recortado ha seguido siendo los protagonistas durante este mes.

Una enmienda técnica del propio PP, autor del anteproyecto de presupuestos, junto con otra presentada por IU, permite arreglar en parte el desaguisado de un recorte próximo al 20% que habría puesto en peligro la viabilidad de la institución.

Finalmente, el recorte será de 1,8 millones de euros, lo que no deja de ser un disparate teniendo en cuenta que la Junta no cubre ni siquiera los gastos de personal. Con todo, lo más grave es que la decisión no responde a una reflexión sobre el modelo de universidad, sino que en gran medida es achacable a la torpeza política de unos y a la utilización de la universidad como arma arrojadiza entre los tres partidos con representación en la Asamblea de Extremadura.

Estos hechos impulsaron a la comunidad universitaria a convocar una protesta el pasado 12 de enero respaldada por la Federación de Enseñanza.